

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 19º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-6495-2022  
CARATULADO : ROJAS/FISCO DE CHILE - C.D.E

Santiago, diez de Enero de dos mil veinticuatro

### VISTOS:

Con fecha 07 de julio del 2022, comparece **don José Ricardo Rojas Ponce**, profesor de educación media, domiciliado en Los Tilos N°626, depto. 203, comuna de Cerrillos, viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representada legalmente por **el Consejo de Defensa del Estado**, encontrándose a su vez representado por doña Ernestina Ruth Israel López, abogada, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1225 piso 2º, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, a fin que sea acogida y se condene a la demandada al pago de la suma de **\$300.000.000.-**, o en su defecto la suma que el Tribunal estime en justicia, más reajustes e intereses y costas.

Con fecha 14 de noviembre del 2022, la parte demandada fue notificada en forma personal subsidiaria de la demanda.

Con fecha 22 de diciembre del 2022, comparece la demandada y evacúa la contestación de la demanda.

Con fecha 13 de enero del 2023, se tiene por evacuada la contestación de la demanda y se confiere traslado a la réplica.

Con fecha 18 de enero del 2023, la demandante evacuó el trámite de la réplica.

Con fecha 31 de enero del 2023, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica y se confirió traslado a la dúplica.

Con fecha 07 de febrero del 2023, se evacuó el trámite de la dúplica.



Con fecha 09 de febrero del 2023, se tuvo por evacuado el trámite de la dúplica.

Con fecha 27 de febrero del 2023, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

Con fecha 13 de septiembre del 2023, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que comparece don don José Ricardo Rojas Ponce, profesor de educación media, y viene en interponer demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, encontrándose a su vez representado por doña Ernestina Ruth Israel López, abogado.

#### Los hechos.

Indica que durante el año 1980 se encontraba preparando el Seminario final de la carrera de Pedagogía en Castellano en la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, luego de haber aprobado todos sus cursos y de haber realizado su práctica profesional; en razón de ello, asistía pocas veces a la semana a la universidad. Agrega que durante su carrera se desempeñó como Ayudante de Cátedra en las asignaturas de Sociología de la educación y en Gramática Sincrónica.

Señala que durante su paso por la universidad formó parte del movimiento estudiantil que buscaba que por el reconocimiento de las organizaciones y Centros de Alumnos, centrándose en el ámbito cultural, formando parte de un Taller Literario que recitaba poemas en diversos actos y mítines realizados dentro de la Universidad.

Indica que se encuentra reconocido como víctima en el Registro Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura bajo el N° 21332.

Señala que con fecha 12 de junio de 1980 asistió a una Peña Folclórica organizada por estudiantes de la universidad en un local llamado “Onda Latina”, ubicado en calle Huérfanos, con la finalidad de pasar a



buscar a su polola de ese tiempo, para irse a su casa; mientras esperaba se les avisó que había gente en la puerta del local que no dejaba salir a nadie, pasando a relatar en primera persona lo siguiente: *“Casi al mismo tiempo alguien se paró al centro del lugar diciendo que todos estábamos detenidos, y de varios lugares surgieron diversas personas que mostrando armas nos hicieron salir al patio, separando a hombres de mujeres. Nos tuvieron en el patio durante a lo menos una hora, y luego se llevaron primero a las mujeres -supe que a una Comisaría de Avenida La Paz-, y a los hombres nos hicieron subir a furgones donde íbamos muy apretados, para llevarnos a la Tercera Comisaría de Carabineros en calle Agustinas.*

*En ese lugar, sin mayores explicaciones nos hicieron entrar a una sala a un costado de la Sala de Guardia. Éramos 70 detenidos, y había muy poco espacio. Después de un rato escuchamos unas voces y fuimos testigos de un a discusión entre el Oficial de Guardia y cuatro sujetos de civil, que se identificaron como oficiales de la CNI. Quien los mandaba exhibió una lista con la que reclamó llevarse a algunos de nosotros (nunca supimos quiénes), pero el Oficial de Guardia se negó terminantemente; la discusión subió de tono, hasta el punto en que los carabineros que estaban al lado del oficial hicieron ademán de sacar sus armas, lo que hizo que los sujetos se fueran amenazando a los carabineros.*

*Casi una hora más tarde nos sacaron al patio y nos formaron contra una muralla. Un grupo de carabineros que salía a hacer ronda se formó frente a nosotros y a una orden pasaron bala en sus metralletas y disparaban unas ráfagas al aire, y luego se fueron riendo entre carcajadas, al ver nuestro miedo.1 Algunos se orinaban frente a este simulacro de fusilamiento.*

*Fuimos trasladados a la Primera Comisaría en calle Santo Domingo, a la cual lléganos cerca de las tres de la madrugada. Nos tiraron a dormir en un gimnasio, en el suelo, y en la mañana siguiente nos llamaron de a uno para ser interrogados por el Servicio de Inteligencia de Carabineros.*

*Cuando negué militancia política recibí una bofetada; al negar por segunda vez, el golpe fue tan fuerte que me hizo caer de la silla en que*



*estaba, y sentí que me había soltado por lo menos dos dientes<sup>2</sup>. A pesar de sangrar me siguieron interrogando respecto de las actividades de mi familia durante bastante rato.*

*Nuevamente recibí otros golpes en la boca del estómago, los que me impedían respirar. La falta de respuestas generaba que nos enterraran alfileres debajo de las uñas para obtener confesiones que no tenían respuestas. El dolor era inhumano, Su Señoría. Después, por alrededor de una hora, fui electrocutado, pero de esto prefiero no hablar.*

*En la noche de ese día nos interrogó la CNI en presencia de carabineros, dentro de la Comisaría. Me di cuenta de que tenían la historia de todas mis actividades universitarias, laborales y toda la historia de mi familia, lo cual me causaba terror y un sentimiento de insignificancia, Vuestra Señoría.*

*El día 17 de Junio de 1980, después de cinco días, nos llevaron al Cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde nos informaron que íbamos a ser relegados a diferentes lugares de Chiloé.*

*Al salir de la Comisaría me negué a firmar un papel donde decía que habíamos sido bien tratados, pero la presión y las amenazas me obligaron a firmar. La partida fue cerca de las 12 de la noche en un bus con asientos de plástico y el viaje duró toda la noche, todo el día y toda la siguiente noche, parando en algunas ciudades para comer en recintos de Investigaciones.*

*Llegamos a Chiloé a eso de las siete de la mañana del día 19 de Junio de 1980 y a mí y dos compañeros nos dejaron en la Comisaría de Quemchi, donde estuvimos tres meses sin poder salir del pueblo. Estaban marcados los límites del pueblo: donde terminaba la calle hacia un lado u otro era hasta donde podíamos llegar. Por uno de los lados estaba el cerro y por otro el mar. Durante los tres meses que estuvimos allí, debíamos firmar 3 veces al día en la comisaría y sólo nos mantuvimos gracias a los aportes de nuestros familiares, ya que no había ninguna posibilidad de trabajar. Muchos de nosotros padecimos enfermedades mentales graves durante esos 3 meses, y resulta lógico que debíamos mendigar comida con vecinos y en las calles pues ningún empleador aceptaría que un trabajador se retirase 3*



*veces durante la jornada a firmar papeles. Sumado a aquello, nuestra circunstancia de parias sociales nos obligaba aún más al ostracismo. Durante dicho período, con frecuencia éramos detenidos y golpeados, so pretexto de no responder a sus preguntas, que no tenían respuestas.*

*El 11 de Septiembre de 1980 se realizó la Consulta Nacional organizada por el gobierno militar. Varios días antes llegaron militares al pueblo y se hicieron cargo de todo en el lugar. Nos llevaron frente al oficial al mando, quién nos advirtió y nos amenazó respecto de sus normas. Le preguntamos si podíamos votar, pues el Decreto de Relegación no nos privaba de nuestros derechos políticos. Después de dos días dijo que podíamos hacerlo.*

*Pero el día de la votación, cuando nos pusimos en la fila para votar, no sacó de ella un sargento con tres conscriptos, quienes nos hicieron entrar al local de votación, cada uno con un fusil en la nuca por parte de los soldados que nos llevaban.*

*Tuvimos que votar sin poder cerrar la cámara secreta, o nos volaban la cabeza de un tiro.*

*Finalmente pudimos salir de Quemchi el día 20 de Septiembre de 1980. Cuando llegué a Santiago me encontré con que, si bien se me permitía terminar mi carrera de Pedagogía, no podía terminar el Seminario ese año, y tuve que realizar todo el proceso nuevamente al año siguiente.*

*Fue un año perdido, el acoso se presentó cuando iba a la Universidad a reuniones del nuevo Seminario, pues desde que entraba al recinto hasta que salía tenía a alguien detrás de mí todo el tiempo, incluso, esperando que terminara la sesión parado afuera de la sala.*

*El problema mayor se presentó cuando ya tuve el título de Profesor, pues durante años, hasta que se acabó el gobierno militar, nunca pude obtener trabajo en algún colegio fiscal ni municipal, a pesar de presentar mis antecedentes varias veces en la entonces Secretaría del MINEDUC. Fueron años en que tuve que trabajar en colegios subvencionados sin opción de mejorar mis ingresos, pasando varios períodos de cesantía y por ende de hambre.*



*Por otra parte, las posibilidades ciertas de ser contratado en la Universidad como profesor que existían antes de mi detención se vieron truncadas, lo que implicó que la carrera académica que podría haber realizado, sencillamente no pudo ser.*

*Esto determinó el curso de mi desarrollo y vida profesional. Si no me hubieran detenido en esa peña, probablemente mi vida profesional habría sido muy diferente.*

*El golpe que me soltó los dientes finalmente me hizo perderlos, y durante mucho tiempo estuve con ese problema pues no tenía recursos para resolver adecuadamente eso, lo que me perjudicó en muchos sentidos, tanto físicamente como en términos de imagen.”*

A razón de lo indicado, de los malos tratos, golpizas, amenazas, persecución, a la que fue sometido, señala que se marcó el desarrollo de su vida personal y profesional, colmando su vida de períodos depresivos y de sentimientos de repugnancia al ver uniformados. Añada que no ha podido volver a acercarse a la corriente eléctrica.

### El Derecho.

#### I. Del Fundamento Normativo de la Responsabilidad Estatal

Señala que la Teoría de la Responsabilidad de Derecho público pretende dejar sin efecto la impunidad para los actos del Estado que lesionan los derechos fundamentales de las personas. Indica que las normas constitucionales que determinan este régimen de responsabilidad del Estado son las de los artículos 6 inciso 3°, artículo 7 inciso 3° y artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política del Estado.

Indica que los pros primeros preceptos señalados declaran que los actos del Estado que infrinjan la juridicidad, generan responsabilidad; por su parte, el tercer precepto, reconoce el derecho del particular afectado para reclamar a los tribunales por el derecho afectado por una lesión. Por tanto, la responsabilidad constitucional se imputa directamente al Estado, y no a través de un tercero dependiente. Lo anterior en conformidad con el artículo 1 inciso 4° y el artículo 5 inciso 2° de la Constitución Política.



Agrega que el Estado quien se constituye como un garante de respeto de los derechos y garantías establecidas a favor de la persona humana, en conformidad con lo señalado en el artículo 19 de la Constitución Política. En concordancia con lo señalado se encuentra el artículo 4 de la ley 18575.

## II. De la Responsabilidad Constitucional del Estado por Crímenes en contra de la Humanidad. Imprescriptibilidad

Arguye que la responsabilidad del estado en estas materias es una responsabilidad constitucional, y no contractual o extracontractual. Agregando que ha sido considerada como imprescriptible por nuestros Tribunales Superiores de Justicia, en razón de los siguientes argumentos:

a. Existencia de estatutos diferentes regulatorios de distinta naturaleza. Señala que el derecho civil chileno fue construido para regular las relaciones de responsabilidad entre los particulares entre sí y de éstos respecto del estado, *“pero no para para regular la responsabilidad internacional del Estado que se origina con la comisión de delitos en contra de la humanidad.”*

b. Existencia de un Principio de Derecho Internacional Especial. Indica que el artículo 29 del estatuto de la Corte Penal Internacional dispone que *“Los crímenes de la competencia de la Corte (de lesa humanidad) no prescribirán”*, no distinguiendo entre las acciones civiles y las penales, siendo ambas imprescriptibles.

c. Seguridad Jurídica y la Falsedad de su Argumento en el caso sub-lite. *“En esta línea, debemos entender que los crímenes contra la humanidad se enmarcan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene por eje central la dignidad de la persona humana, donde el bien jurídico protegido se encuentra, indubitadamente, en un plano superior.”*

d. Por un Principio de Coherencia. *“(…) si de los crímenes contra la humanidad derivan diversas acciones (como la acción civil y la acción penal), ambas deben tener la misma suerte, es decir, se excepcionan de la prescripción extintiva”.*



e. Enfoque centrado en las víctimas y en la humanidad. “(...) *el Derecho Penal Internacional está elaborado en torno a la víctima, por lo cual, frente a los crímenes internacionales, los jueces nacionales deben realizar un análisis y aplicación de las normas de una forma diferente.*”

f. Principio Finalista. Indica que la persecución de los crímenes de lesa humanidad tiene un fin preventivo, uno sancionador y otro reparador; y que si operase la prescripción civil, no se podrían cumplir a cabalidad dichos fines.

g. Principio de la reparación integral. La reparación es un derecho para el afectado y una obligación para el infractor de los DD.HH.

### III. Sobre el Factor de Atribución de la Responsabilidad del Estado: Responsabilidad Objetiva.

Señala que para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado, la Corte Suprema ha fallado, que no es necesaria la acreditación del elemento subjetivo, debiendo probarse la existencia de daño o perjuicio provocado, y la actividad o inactividad del órgano del estado que lo genera, sumado a la relación de causalidad.

a. Existencia del daño o lesión. Arguye que “*Actualmente nadie podría negar la procedencia del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en nuestra propia Carta Fundamental.*”

b. Actividad del Órgano en el Ejercicio de sus Funciones. Indica que de los hechos narrados y de la prueba que se rendirá, la prisión y humillaciones de las que fue objeto se identifican con los actos de tortura para efecto de configurar la responsabilidad del Estado en consideración de los siguientes argumentos:

b.1.El Delito de Tortura en el Ordenamiento Interno. Indica que la Ley 20.357 tipifica los crímenes de Lesa Humanidad, haciendo especial hincapié en su artículo 7. Igualmente hace mención al Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech).





b.2. El Delito de Tortura en el Derecho Internacional. Señala que la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, consagra qué se entenderá por tortura.

#### IV. Sobre la naturaleza del daño que se demanda

Señala que el daño demandado en autos obedece un índole moral, entendiéndolo como aquel que *“existe cuando se ocasiona a alguien un mal, perjuicio o aflicción en lo relativo a sus facultades espirituales; un dolor o aflicción en sus sentimientos.”*

a. Titularidad de la acción. Indica que los sujetos activos de la reparación del daño moral son la víctima inmediata o directa y la víctima por repercusión; agregando que la titularidad del primero se encuentra fuera de toda discusión, al ser el demandante abiertamente reconocido por el Fisco de Chile en su calidad de víctima, en conformidad con el Informe Valech.

b. Prueba del Daño Moral. Señala que en la gran mayoría de la jurisprudencia se ha entendido que el daño moral existe por la sola ocurrencia del hecho ilícito, no siendo necesaria prueba alguna al respecto.

c. Fijación del quantum indemnizatorio por daño moral. La doctrina ha extraído del análisis de jurisprudencia, ciertos parámetros:

i. Gravedad del suceso que constituye la causa del daño: en los delitos de lesa humanidad, la excesiva gravedad es manifiesta.

ii. Naturaleza del Derecho cercenado: una lesión de Derechos Humanos, emanados de la dignidad humana, consagrados tanto constitucional como internacionalmente.

iii. Las consecuencias que se derivan del daño causado; su duración y persistencia que impliquen convertirlo en un perjuicio moral futuro: señala que los daños “no sólo han perdurado décadas, sino que se han convertido en la sustancia misma de la persona del afectado y sus cercanos, no pudiendo ser calificados como sólo daños perdurables, sino como daños que han afectado el pasado, el presente y, sin duda, afectarán su futuro”.



IV. Tendencias actuales en materia de indemnización de daño moral por delitos de lesa humanidad

Arguyen que el cambio en la jurisprudencia lleva a avaluar el daño moral en base a la dimensión del daño ocasionado a la víctima y no al mero tiempo de reclusión.

V. Los actos cometidos por el Estado de Chile a través de sus órganos son actos terroristas.

Señala que la conducta vulneradora de DDHH por parte de la demandada reviste un carácter terrorista, atendido a que persiguió generar sufrimiento físico y mental.

VI. Causalidad

Señala que el mismo Estado de Chile ha reconocido la calidad de víctima del demandante, al incluirle en la nómina de personas reconocidas como víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Finalmente, solicita tener por entablada demanda de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del demandado, ya individualizado, acogerla a tramitación, y -en definitiva- aceptarla en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por las torturas de que fue objeto, la suma de \$300.000.000 al demandante, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el Tribunal estime ajustada a derecho y equidad, con costas.

**SEGUNDO:** Que el Fisco de Chile al comparecer, evacúa la contestación de la demanda, solicitando su completo rechazo y en subsidio, solicita la rebaja sustancial del monto indemnizatorio pretendido. Primeramente, efectúa una breve síntesis de la demanda, procediendo a indicar las excepciones, defensas y alegaciones, que se detallaran a continuación.

Primera Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizado el demandante.



Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas.

Señala que es necesario comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos para efectos de posiciones estas indemnizaciones dentro del panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a duda, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional (Sriram, Chandra Lekha, *Confronting Past Human Rights Violations*. New York, 2004, pp. 5). Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Por otro lado, hace presente que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Se debe recordar que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas (Greiff, Pablo de, ed. *The Handbook of Reparations*. Oxford, Oxford University Press, 2006, p.2).

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe



normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño (Lira, Elizabeth; Loveman, Brian. Políticas de reparación. Chile 1990-2004. Santiago, LOM, 2005 p. 76).

#### La complejidad reparatoria.

Acude nuevamente a lo expresado por Elizabeth Lira, indicando los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse" (Lira, Elizabeth, The Reparations Policy for Human Rights Violations in Chile, en de Greiff, Pablo ed. The Handbook of Reparations, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 56).

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la



República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *"reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas"*.

Por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación cabe indicar que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación: *"un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe"*. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo el país ha



afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese orden de ideas, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y; c) Reparaciones simbólicas.

Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional particular del país, el que busca la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

#### Reparación mediante transferencias directas de dinero.

Diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también -como se ha mencionado- a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Al respecto, le parece necesario destacar que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: **a)** Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); **b)** Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y **c)** Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-; **d)** Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de



\$23.388.490.737-. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Siguiendo desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido en general, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Reparaciones específicas: Ley 19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos.

En lo tocante al caso concreto, señala que todos los demandantes han recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes 19.234, 19.992 y sus modificaciones, la que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas.

Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, cabe consignar que los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000. De esta forma, conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, el demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.



Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas.

Tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008. Rule of Law tools for post-conflicts states. Reparations programmes, New York, United Nations, p. 28).

En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad, cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o





prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992.- Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos. Se les ofrece asimismo apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, ha podido postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas.

Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda

#### Reparaciones simbólicas.

Al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor -siempre discutible en sus virtudes compensatorias- sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.



La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así, Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, indica que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, *"pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) "Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida" y b) "Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo"* (Fueyo L., Fernando, Instituciones de Derecho Civil Moderno, Santiago, Ed. Jurídica, 1990, p. 52).

En esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: 1) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; 2) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido- desaparecido; 3) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, íconos, documentos o monumentos; 4) El establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; 5) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras. Destacan, el "Memorial de los



prisioneros de Pisagua" en el Cementerio de esa ciudad; el Mausoleo "Para que nunca más" en el Cementerio 3 de Iquique; el Memorial "*Si estoy en tu memoria, soy parte de la historia*" en las afueras del Cementerio Municipal de Tocopilla; el Memorial "Parque para la Preservación de la Memoria Histórica de Calama" en el camino a San Pedro de Atacama; el Memorial en homenaje a 31 víctimas de Antofagasta en la puerta principal del Cementerio General de la ciudad; el "Memorial en homenaje a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de Atacama" en el Frontis del Cementerio Municipal de esa ciudad; el "Memorial por los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos" en la Plaza de Armas de Curacaví; el "Memorial a las víctimas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas del Partido Socialista" en la sede de este partido; el "Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca" en esa ciudad; y el "Memorial Escultórico de los Derechos Humanos de Punta Arenas" en el Cementerio Municipal de esa ciudad. Todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas.

De todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH.

Así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

En este punto el fallo Domic Bezic, Maja y otros con Fisco, ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es



incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *"aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal"* (C Suprema., Domic Bezic, Maja y otros con Fisco [2002] Rol 4753-2001, Considerandos 28° a 34°).

Lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2013, en que reiteró la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que: *"DECIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. En efecto, la Ley N° 19.123 es la que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, estableció pensiones de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas que señala y según su Mensaje el objetivo último de ella era reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, de acuerdo al artículo 2 de su texto se dispone que: "Le corresponderá especialmente a la Corporación: 1.- Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de ésta para acceder a los beneficios contemplados en esta ley". De lo expresado puede inferirse que los beneficios otorgados a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado por esas personas, objetivo resarcitorio coincidente con la pretensión formulada a través de la presente vía jurisdiccional y en consecuencia es evidente que aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria de daño moral que la aquí reclamada y son financiados con recursos fiscales según se desprende del Título VI de dicha ley, circunstancias todas que impiden acoger la pretensión de la actora por contraponerse con la idea básica que una misma causa no puede dar origen a una doble indemnización.*



*Refuerza lo sostenido el hecho que el artículo 24 de la ley solamente hizo compatible la pensión de reparación con cualquiera otra pensión de que gozara o pudiere gozar el respectivo beneficiario, de manera que no cabe extender el alcance de esta norma a otras situaciones no previstas en sus términos. En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien -como se dijo- percibe las pensiones a que se ha hecho referencia. De esta forma es innecesario pronunciarse sobre la eventual renuncia a la prescripción por parte del Fisco de Chile, como quiera que la acción deducida por la señora Rivera es incompatible con los beneficios aludidos" (C. Suprema, Rivera Orellana, Flor y otros con Fisco de Chile, 30 de enero de 2013, Rol 4742-2012).*

En el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente "*reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas*" (C. Suprema, Espinoza Figueroa y Rioseco Espinoza con Fisco de Chile, Rol 1963-2005; C. Santiago, Espinosa Olea con Fisco de Chile, Rol 2400-2002), lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

En efecto, cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Así, en el caso Almonacid se señaló expresamente que "*la Corte valora positivamente la política de reparación de violaciones a derechos humanos adelantada por el Estado (supra párr. 82.26 a 82.33), dentro de la cual la señora Gómez Olivares y sus hijos recibieron aproximadamente la*



*cantidad de US\$ 98.000,00 (noventa y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), más beneficios educacionales correspondientes aproximadamente a US\$ 12.180,00 (doce mil ciento ochenta dólares de los Estados Unidos de América). Teniendo en cuenta todo lo anterior -prosigue la sentencia- el Tribunal considera no ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial...” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, cons. 161).*

En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades. Un documento denominado "Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos" (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, agrega que ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a



grupos étnicos, raciales o religiosos marginados (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008 op. cit., p. 35).

En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación (Lira, Elizabeth, op. Cit. 2006, p. 94).

En conclusión, estando la acción interpuesta en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, el demandante ya fue indemnizado a través de las leyes de reparación, por tal motivo opone formalmente la excepción de reparación integral, la que acreditará en la oportunidad procesal correspondiente.

## II.- Segunda Excepción: Prescripción Extintiva.

Además, de la excepción anterior, indica que opone la excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, según los argumentos que detallará a continuación.

### Normas de prescripción aplicables.

Indica que la excepción de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios que interpone se funda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes.

Alega que conforme al relato efectuado por el actor, la detención que sufrió ocurrió desde el día 30 de junio de 1986 hasta septiembre del año 1991. En el caso concreto, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la



democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 30 de noviembre del 2022, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En consecuencia, ratifica que la excepción de prescripción opuesta es la de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso que el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, señala que viene en oponer la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

#### Generalidades sobre la prescripción.

Por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. *"Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible"* (Alessandri, Somarriva y Vodanovic. Tratado de Las Obligaciones. Editorial Jurídica de Chile. 2- Ed. 2004. Volumen III. p. 181). Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Estima que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *"para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad"* (C. Santiago, 08 de abril de 1982. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXX, Sec. 2-, p. 38).





Hace presente que la prescripción es una institución universal y de orden público. Efectivamente, las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: "*Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo*".

Esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión "igualmente" que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

La prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

La responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

#### Fundamento de la prescripción.

La prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Es de destacar que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en del orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien



jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Por las mismas razones, consigna que la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

No está demás decir que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que el demandante estuvo en situación de hacerlo.

#### Jurisprudencia sobre la prescripción.

Señala que la Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó el día 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Al efecto, en relación a distintos puntos, procede a citar dicho fallo de la siguiente manera.



En relación al principio general que debe regir en materia de prescriptibilidad, cita lo siguiente: "*Octavo: Que la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones. A ello cabe agregar que no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales; y, en ausencia de ellas, corresponde estarse a las reglas del derecho común referidas específicamente a la materia*".

En cuanto a los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, señala que no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal y al efecto procede a citar lo siguiente: "*Cuarto: Que desde luego y en lo que dice relación con la alegación de vulneración de tratados internacionales cabe dejar establecido, en forma previa, que al tiempo de los hechos investigados no se encontraban vigentes en Chile el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que sólo vino a ser aprobado por Decreto Supremo N° 778 (RR.EE.) de 30 de noviembre de 1976, publicado en el Diario Oficial de 29 de abril de 1989, ni la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, promulgada por Decreto Supremo N° 873 (RR.EE.), de 23 de agosto de 1990, publicado el 5 de enero de 1991 (...)*" *Quinto: Que no obstante lo anterior y en la misma línea de razonamientos acerca del contenido de tratados internacionales, previo es también hacer notar que ninguno de los cuerpos normativos citados en el fallo impugnado establece la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales. Así, la propia*



*Convención Americana de Derechos Humanos no contiene precepto alguno que consagre la imprescriptibilidad alegada por el recurrente. Además, ninguna de las disposiciones citadas en el recurso excluye respecto de la materia en controversia la aplicación del derecho nacional. En efecto, el artículo 1º sólo consagra un deber de los Estados miembros de respetar los derechos y libertades reconocidos en esa Convención y garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna; y el artículo 63.1 impone a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un determinado proceder si se decide que hubo violación a un derecho o libertad protegido. (...) Sexto: Que, por su parte, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, que prohíbe a las partes contratantes exonerarse a sí mismas de las responsabilidades en que han incurrido por infracciones graves que se cometan en contra de las personas y bienes protegidos por el Convenio a que alude el artículo 131, debe entenderse necesariamente referido a infracciones del orden penal, lo que resulta claro de la lectura de los artículos 129 y 130 de dicho Convenio que aluden a actos contra las personas o bienes citando al efecto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, el causar de propósito grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un cautivo a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga o privarle de su derecho a ser juzgado regular e imparcialmente al tenor de las prescripciones del Convenio. (...) Séptimo: Que, finalmente, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, así como de los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto antes indicado, se refiere también y únicamente a la acción penal. En efecto, en el artículo IV establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes antes indicados”.*



Respecto a no existir una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, indica que debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. Así, junto con el considerando octavo antes citado, reproduce considerando décimo que dice: "*Décimo: Que de acuerdo a lo anterior, en la especie resulta aplicable la regla contenida en el artículo 2332 del mismo Código, conforme a la cual las acciones establecidas para reclamar la responsabilidad extracontractual prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*".

No obstante lo anterior, alega que el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. Las sentencias anteriores y posteriores fallo que se cita en este apartado, no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa y que solicita se tenga en especial consideración al momento de resolver el juicio, en conformidad al referido fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013, que aplicó la institución de la prescripción en la materia de autos.

#### Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria.

La indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de estos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Así lo ha hecho presente la doctrina fiscal en sus diversas defensas y de la misma manera lo ha recogido reiteradamente la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido



patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado.

En tal sentido, estima que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. En efecto, basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

#### Normas contenidas en el Derecho internacional.

Finalmente, aun cuando el demandante formula alegaciones en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en este sentido, su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, declarando de antemano que ninguno de ellos contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

La "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad", aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la



responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto la Corte Suprema.

La Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada "Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad", se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

La Convención Americana de Derechos Humanos, no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención, destaca que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultándola para imponer condenas de reparación de daños, pero ello no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción, en Chile, ergo, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a los Tribunales nacionales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Señala que el planteamiento de su defensa fiscal sobre prescripción ha sido reconocido por la Corte Suprema en la sentencia de fecha de 24 de julio de 2007 rol corte 1133-2006, caratulados "Neira Rivas, Gloria con



Fisco de Chile", que en sus considerandos vigésimo quinto y vigésimo sexto desestimó el recurso de casación de la demandante por considerar inaplicables las disposiciones citadas según se pasa a señalar: "*VIGESIMO QUINTO: Que, asimismo el recurso ha imputado a la sentencia que cuestiona haber transgredido, al aceptar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, diversas normas pertenecientes al Derecho Internacional de Derechos Humanos, que consagran la imprescriptibilidad en materias relativas a la protección de estos derechos, mencionado, a tal efecto, en primer término, el ordenamiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- promulgado mediante Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial de 5 de enero de 1991. (...) VIGÉSIMO SEXTO: Que semejante reproche aparece desprovisto de fundamentación atendible, puesto que, si bien dicho tratado tiene la fuerza normativa que le reconoce el artículo 5° inciso 2° de la Carta Fundamental, su vigencia arranca de una época posterior en el tiempo a aquélla en que ocurrieron los hechos objeto del actual juzgamiento, de modo que sus disposiciones no les resultan aplicables. Por lo que toca específicamente al artículo 63 - única disposición del Pacto que el recurso presenta como vulnerada - basta una somera lectura de su texto para comprender que en él se plasma una norma imperativamente dirigida a la Corte Internacional de Derechos Humanos, y que ninguna correspondencia guarda con la materia comprendida en el recurso".*

Lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa "Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile", autos ingreso N° 4067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007. En el mismo sentido se han pronunciado reiterados fallos de la Excma. Corte Suprema.

No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, estima que el Tribunal





no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Alegación sobre el daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, procede a formular las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$ 200.000.000.-

Fijación de la indemnización por daño moral.

Hace presente no puede dejar de considerarse que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales, lo que dependerá, de las secuelas sufridas con motivo de los hechos señalados en el libelo y de conformidad a los antecedentes que obren en autos en la etapa probatoria del mismo. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Al respecto, la Excma. Corte Suprema ha señalado: "*Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga*



*algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido*” (Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo LXX, Sec. 4a. pág. 61). En la perspectiva antes indicada, estima que la regulación del monto de la indemnización debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago (Diez Schwerter, José Luis. El Daño Extracontractual. Jurisprudencia y Doctrina. Editorial Jurídica de Chile, año 1998, pág. 256). En tal sentido, las idénticas cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

En tal sentido, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que para fijar el quantum debe acudirse al Principio de Prudencia que conduce a la proporcionalidad. En efecto, en la sentencia de segunda instancia dictada en recurso de apelación Ingreso Corte 6891-2013, la I. Corte de Apelaciones de Santiago resolvió: *"Cuarto: Que ante tales argumentos, surge el problema de determinar la real cuantía de dicho daño moral, que como se ha dicho no se puede desconocer, su existencia en el caso, pero si bien, tal actividad se dificulta, por la generalidad de los hechos expuestos en la demandada, sin que se haya precisado cada uno de ellos y la total extensión del perjuicio - lo que permitiría efectuar algún grado de distinción o diferenciación- esta situación no puede ser óbice para alcanzarlo, por lo que se ha de recurrir a la prudencia, la que nunca debe ser desproporcionada, por lo que ésta Corte fijará la cuantía de tal*



*reparación en \$3.000.000 para cada uno de los actores referidos en el considerando vigésimo sexto".*

Excepción subsidiaria de consideración de los pagos ya recibidos del Estado y que guarden armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

En subsidio de las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva de las acciones deducidas, alega que la fijación del daño moral por los hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos por el actor a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Además, estima pertinente hacer presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse.



Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

El reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

La jurisprudencia de los tribunales superiores así lo han decidido de manera uniforme, por ejemplo, en fallo que aparece en el Tomo 55, sección 1º, página 95, de la revista de Derecho y Jurisprudencia, *"En los juicios sobre indemnización (por responsabilidad extracontractual) no puede considerarse en mora a la parte demandada mientras no se establezca por sentencia ejecutoriada su obligación de indemnizar y el monto de la indemnización. Por tanto, no procede en esta clase de juicios hacer extensiva la demanda de cobro de intereses de la suma demandada o de la que se fije en el fallo que recaiga en el juicio"*.

Por consiguiente, el hipotético caso que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

**TERCERO:** Que la demandante al evacuar el trámite de la réplica, reitera íntegramente la demanda, señalando lo siguiente respecto a las excepciones opuestas por la demandada:

I. En cuanto a la Excepción de Reparación Integral y la supuesta improcedencia de la indemnización solicitada por esta parte



Indica que los beneficios concedidos por al Estado a las víctimas de tortura no pueden ser concebidas como una indemnización de perjuicios, sino como un beneficio de carácter asistencial. Añade que en dicho sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en múltiples ocasiones.

## II. En cuanto a la Prescripción de la acción que aquí se deduce

Señala que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre la problemática, zanjando el asunto de la siguiente forma: *«Quinto: Que sin perjuicio de lo razonado en la sentencia recurrida, esta Corte tiene en consideración que la acción indemnizatoria planteada en estos autos tiene su origen en la perpetración de un delito de lesa humanidad, en que se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes que han cometido violaciones a los derechos humanos. De esta manera, el contexto en que los hechos fueron verificados - con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales - trae no solo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada de ellos, como reiteradamente lo ha sostenido este tribunal, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el periodo 1973-1990, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este sentido, SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).*

*Por lo demás, la acción civil aquí entablada en contra del Fisco tendientes a conseguir la reparación integral de los perjuicios ocasionados,*



*encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5º, inciso segundo, y 6º de la Constitución Política de la Republica.*

*Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de sucesos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una regla internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias del agravio.» (CS rol 19069-2018, de 20 de septiembre de 2018).*

### III. En cuanto al monto solicitado como indemnización.

*Señala que “habiéndose hecho presente el criterio de nuestro Máximo Tribunal en cuanto a que los beneficios asistenciales otorgados por el Estado a mi representado no constituyen en sentido alguno una indemnización, entendemos que el monto solicitado se condice con el daño producido en atención a los hechos expuestos en la demanda (...).”*

**CUARTO:** Que al evacuar la dúplica, la demandada señala que da por expresadas la totalidad de las argumentaciones contenidas en la constatación de la demanda de autos, solicitando el rechazo de la demanda. En relación a lo señalado por la demandante en la réplica, señala lo siguiente:

En relación a la excepción de reparación satisfactiva opuesta por esta parte, reiteran lo señalado al contestar, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada.

En relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, se reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia



dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que se encuentra transcrita en la contestación de la demanda. Indica que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Agrega que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil.

Señala que en cuanto a las alegaciones vertidas por la parte demandante relativas a al monto demandado y los reajustes e intereses, doy por reproducidos en forma expresa las alegaciones vertidas en la contestación de la demanda.

**QUINTO:** Que al recibir la causa a prueba, se fijan como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: “1º) *Fecha y circunstancias de la detenciones del demandante Jose Ricardo Rojas Ponce;* 2º) *Participación culposa o dolosa de agentes del estado en la detención del demandantes de auto;* 3º) *Efectividad que el demandante, ha sido reconocido como víctima de violación a los derechos humanos, según informe emanado de algún órgano del estado;* 4º) *En la afirmativa del numeral 3º, pagos y otras acciones de reparación efectuados por el Estado de Chile al demandante, en su calidad de víctima de derechos humanos;* 5º) *Existencia del daño moral, hechos constitutivos del mismo;* 6º) *Efectividad de haberse interrumpido el plazo de prescripción de la acción de indemnización de perjuicios.”.*

**SEXTO:** Que la demandante, a fin de fundar sus dichos, ha rendido la siguiente prueba en los autos, a folios 26, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 41: 1) Sentencia de causa C-14885-2019, de fecha 16 de abril de 2020, del 9º Juzgado Civil de Santiago, confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo rol Civil 1542-2021; 2) Sentencia de causa C-2368-2020,



de fecha 14 de diciembre de 2021, del 29° Juzgado Civil de Santiago, confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo rol Civil 62-2022; 3) Sentencia de causa C-1112-2019, de fecha 30 de junio de 2021, del 27° Juzgado Civil de Santiago, confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en fallo rol Civil 6671-2021; 4) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Las Consecuencias en las víctimas; págs. 497-498, inclusive; 5) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Lesiones y enfermedades; págs. 498 a la 501, inclusive; 6) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias psicológicas; págs. 501 a la 503, inclusive; 7) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: La tortura como experiencia traumática; págs. 503 a la 506, inclusive; 8) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias en las relaciones familiares; págs. 506 y 507, inclusive; 9) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias sobre la vida sexual de las personas; págs. 507 y 508, inclusive; 10) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias en los niños; págs. 508 y 509, inclusive; 11) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo VIII Consecuencias de la prisión política y la tortura: Consecuencias psicosociales; págs. 509 a la 512, inclusive; 12) Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (VALECH), comisión creada y publicada en el Diario Oficial bajo Decreto Supremo N° 1.040 el 11 de noviembre de 2003; 13) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura Amenazas, págs. 270 a la 272, inclusive; 14) Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Aplicación de Electricidad,





págs. 265 a la 270, inclusive; **15)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. Golpizas Reiteradas, págs. 256 a la 260, inclusive; **16)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Humillaciones y Vejámenes, págs. 274 a la 276, inclusive; **17)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. Lesiones Corporales Deliberadas, págs. 260 a la 262, inclusive; **18)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Privaciones Deliberadas de Medios de Vida, págs. 285 a la 286; **19)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura Simulacro de Fusilamiento, págs. 272 y 273, inclusive; **20)** Nómina de personas reconocidas como víctimas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; **21)** Página N° 725 del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, autor Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; **21)** Informe Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los DDHH, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, en fecha 16 de octubre de 2017; **22)** Conferencia internacional Consecuencias de la tortura en la salud de la población chilena: Desafíos del Presente, realizada por la Unidad de Salud Mental de la división de salud de las personas del Ministerio de Salud con la colaboración de profesionales, representantes de equipos PRAIS de RM, de las organizaciones no gubernamentales e instancias intersectoriales y el organismo internacional “The International Rehabilitation Council for Torture Victims”, en fecha 21-22 de junio de 2001 en Santiago de Chile; **23)** Informe La Tortura Un Problema Médico, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en marzo de 1983; **24)** Informe La Tortura, Modelo de Intervención, realizado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas en el año 2005; **25)** Norma Técnica para la atención en salud de personas afectadas por la represión política ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990, de la subsecretaría de Salud Pública, división de Prevención y Control de Enfermedades, Departamento de Salud



Mental. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile; **26)** Artículo Represión política, daño transgeneracional y el rol del estado como agente reparador, columna de opinión del psicólogo clínico Sergio Beltrán P. del Programa de Reparación Integral en Salud, del Servicio de Salud Araucanía Norte, publicado en fecha 30 de junio de 2017; **27)** Informe Transgeneracionalidad del Daño, realizado por el psicólogo Freddy Silva G. en su carácter de Coordinador de Equipo Especializado PRAIS del Servicio de Salud Aconcagua, en fecha 16 de octubre de 2017; **28)** Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo III Contexto; **29)** Carpeta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura Valech, correspondiente a don José Ricardo Rojas Ponce, RUN: 7747812-4; **30)** Portada principal de expediente, Comprobante de Ingreso de Ficha y Antecedentes ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don José Ricardo Rojas Ponce, de fecha 09 de diciembre de 2003; **31)** Ficha de Ingreso Preso Político y/o Torturado ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago, a nombre del demandante don José Ricardo Rojas Ponce de fecha 27 de noviembre de 2003; **32)** Datos de la Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago; **33)** Antecedentes de Tortura de la Detención ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Santiago; **34)** Recorte de prensa titulado “Otros 70 en libertad. Gobierno ordenó relegación de 22 detenidos de peña folklórica”; **35)** Decreto exento N° 2531, de fecha 17 de junio de 1980 suscrito por el ministro del Interior Sergio Fernández Fernández; **35)** Normativa Técnica General del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos, aprobada por el Ministerio de Salud; **36)** Resolución Exenta N° 437, que aprueba la Norma Técnica General N° 88 del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos Humanos para las personas afectadas por la represión política ejercida por el estado de Chile entre los años 1973 a 1990; **37)** Informe Psicológico de daño a Consecuencia de detención política, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes del demandante don José Ricardo Rojas Ponce emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral (PRAIS) perteneciente al Servicio de Salud Concepción, en febrero de 2022, suscrito



por el profesional Psicólogo Jorge Riquelme Marín; 38) Informe Social de daño del demandante don José Ricardo Rojas Ponce suscrito por la profesional Trabajadora Social Ana María Castro Rosales; 39) Certificado de título profesional de Trabajador Social de doña Ana María Castro Rosales emitido por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cédula nacional de identidad número 19.119.238-9, de fecha 02 de marzo 2021; 40) Postítulo de Peritaje Social en Procesos Judiciales obtenido por doña Ana María Castro Rosales, dictado por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera, de fecha 09 de diciembre de 2021.

**SÉPTIMO:** Que por su parte, la parte demandada no acompañó prueba instrumental. No obstante tramitó oficio al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo informe sobre los beneficios por reparación recibidos por el demandante en calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, en virtud de las leyes 19.992 y 20.874, consta a folio 15 del cuaderno principal.

**OCTAVO:** Que previo a pronunciarse el Tribunal sobre las diversas alegaciones de las partes, resulta fundamental para esta sentenciadora señalar que el caso de marras versa sobre indemnización de perjuicios reclamada al Estado de Chile, a partir de violaciones a los derechos humanos en la comisión de delitos denominados de lesa humanidad o crímenes de guerra, cometidos por agentes del estado en su representación y financiados por este, cuyas actuaciones son reconocidas, en el caso de marras, a partir del informe emitido por la Comisión Valech.

**NOVENO:** Que a partir de lo anterior, el Estado de Chile efectuó un reconocimiento de la comisión de estos ilícitos a través de la Comisión ya nombrada.

La responsabilidad estatal versa en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Constitución Política de la República, conformes a los cuales el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, recogiendo y aplicándose entonces lo preceptuado por el artículo 38 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 18.575, como el derecho de toda víctima a ser reparada en los daños causado “el Estado será responsable por los daños que causen los



órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado”, principios y derechos refrendados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la materia.

**DÉCIMO:** Que, si bien la responsabilidad del Estado se funda en los artículos citados, la integración de instrumentos Internacionales que versan sobre Derechos Humanos al ordenamiento jurídico nacional, a través del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política, impide al Estado aplicar el derecho interno con el fin de eludir su responsabilidad, debiendo reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental que por su naturaleza, la acción que pretende su resarcimiento, es imprescriptible. Ya lo señala la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema: *“A mayor abundamiento, se señala que el artículo 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos; y si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial, obedece a su índole humanitaria, en protección a los derechos humanos, reconocidos en la norma internacional citada, que primea sobre la preceptiva de derecho interno, en especial el artículo 2497 del Código Civil”*. (Fallo Rol C-2289-2015, 29 de marzo de 2016).

**UNDÉCIMO:** Que en cuanto a la excepción de reparación satisfactoria opuesta por la demandada, indicando que el actor es beneficiario de las prestaciones ideadas por el Estado a través de la Ley 19.234 y 19.992 y en razón de ello ya existe una reparación del daño, esta sentenciadora considera que la calidad de víctima no es excluyente de la pretensión indemnizatoria de la presente acción, toda vez que las medidas de las leyes indicadas fueron creadas de forma general sin consideración a cada caso en particular, sin poder presumir que el Estado a través de dichas efectuará una reparación íntegra del daño causado.

Que a mayor abundamiento, que el Estado asuma su participación y colaboración en los hechos y pretenda el cumplimiento del deber de



resarcimiento para con las víctimas, no importa para ellas la renuncia de sus formas, ni exclusión de otras medidas de reparación.

**DUODÉCIMO:** Que sobre la excepción de prescripción de la acción invocada por la demandada, dicha parte solicita la aplicación de las normas del Código Civil en virtud de justificar la existencia de ésta a fin de otorgar certeza de las relaciones jurídicas, el resguardo del patrimonio y la libre circulación de los bienes, no obstante, imperativo resulta señalar que la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema ha reiterado que en el caso de delitos de lesa humanidad, la acción penal es imprescriptible, resultando contradictorio y poco coherente que la acción civil no siguiera este mismo razonamiento.

Lo anterior resulta comprensible a partir de que el hecho lesivo consiste en un crimen de guerra o delito de lesa humanidad, especialmente contenido en el artículo 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, convenciones internacionales que Chile ha ratificado y que son parte integrante del ordenamiento jurídico nacional por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República.

**DÉCIMO TERCERO:** Que la Comisión Verdad y Reconciliación, creada por el Decreto Supremo N°355 de 1990, del Ministerio de Justicia tuvo por objeto, conforme a su artículo 1º: *"...contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años"*, procurando en cumplimiento de dicho cometido, establecer un cuadro lo más completo posible sobre los hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias.

A su vez, la ley N°19.123, creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, con el objeto de coordinar, ejecutar y promover las acciones necesarias en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, correspondiéndole esencialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas.



Por Decreto N°1040, de fecha 26 de septiembre de 2003, se dispone la creación de la Comisión Valech, que tendría la finalidad de asesorar a la presidencia de aquel entonces y suplir información faltante y deficiencias de la Comisión Rettig, que solo contemplaba quienes habían muerto a manos de agentes del estado durante el período de dictadura militar, incluyéndose ahora los casos de prisión y tortura que no fueron contenidas en el informe anterior.

El informe Valech contiene la nómina de víctimas establecida por la Comisión y ha servido de base a los beneficios dispuestos por la Ley N° 19.992.

En la referida nómina de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, se reconoce a don Luis Eduardo Velásquez Sepúlveda como víctima de prisión política y tortura con el número 25844 del listado, siendo por tanto declarada víctima de violaciones a los Derechos Humanos.

**DÉCIMO CUARTO:** Que según la jurisprudencia y doctrina, en un sentido casi unánime, señala que la acción penal resulta imprescriptible, no resultando aplicable las normas civiles de prescripción de la acción, por resultar contrario al sistema Internacional de los Derechos Humanos, entendiéndose integrados a nuestro Ordenamiento Jurídico por remisión directa y expresa del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República, asumiendo por ello el Estado chileno la obligación de instaurar el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a la reparación de todos los males experimentados como consecuencia del acto ilícito. Que a esto es lo indicado en el artículo 1° de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad, que establece que estos delitos son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

Que a mayor abundamiento, la ley 19.123 justifica su creación en el reconocimiento de las violaciones a los Derechos Humanos que se perpetraron en el país, a las familias de aquellos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que fueron víctimas directas de acciones realizadas por agentes del estado, a través de regalías de carácter económico o pecuniarias.



**DÉCIMO QUINTO:** Que resulta fundamental para un estado de derecho democrático otorgar un tratamiento especial a los casos de crímenes de lesa humanidad en los que tuvo participación y activa colaboración del Estado, aplicándose a este una prolongación en el deber de reparación integral de las víctimas.

**DÉCIMO SEXTO:** Que a lo anterior, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra, señala en su artículo 29 que las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente. Cada una de las partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una quiera de las infracciones graves y deber hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones provistas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ellas cargos suficientes. Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio. Los inculcados se beneficiarán, en todas las circunstancias, de garantías de procedimiento y libre defensa, que no podrán ser inferiores a las previstas en los artículos 105 y siguientes del presente Convenio.

A su vez, el artículo 130 expresa que *“Las infracciones graves a las que se refiere el artículo anterior son las que implican uno cualquiera de los actos siguientes si se cometen contra personas o bienes protegidos por el Convenio: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, el hecho de forzar a un prisionero de guerra a servir a las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o el hecho de privarlo de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente*



*Convenio*”; y el artículo 131 establece “Ninguna *Parte Contratante* podrá exonerarse, ni exonerar a otra *Parte Contratante*, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma y otra parte *Contratante* a causa de las infracciones previstas en el artículo anterior”.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que la demanda efectuada en contra del Fisco tiene asidero en los ejes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, encontrándose Chile suscrito a dichos, obligándose al reconocimiento y completa protección al derecho de íntegra reparación de los daños provenientes de estos delitos.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que bajo este prisma de protección y aplicación del derecho internacional, no es aceptable el cuestionamiento a la aplicación normativa que verse sobre Derechos Humanos, y menos aquellas que ordenan la reparación por parte de los Estados, bajo el argumento de la protección del derecho interno, por cuanto se compromete la responsabilidad del Estado de Chile, de los acuerdos y tratados internacionales que ha ratificado, así como el principio de buena fe comprometido con las normas *Ius Cogens* o costumbre del Derecho Internacional.

Que a esto, la Convención de Viena sobre los Derecho de los Tratados, indica en su artículo 27 en cuanto al derecho interno y la observancia de los tratados, que Una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, razones suficientes para rechazar las excepciones de reparación satisfactiva, de prescripción extintiva de la acción y en subsidio las alegaciones vertidas por la demandada.

**DÉCIMO NOVENO:** Que de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado, y la circunstancia de detención, prisión política y tortura de don Luis Eduardo Velásquez Sepúlveda y que no habría tenido lugar sin la intervención de funcionarios estatales, ésta no se hubiera producido, queda por dar establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados.





**VIGÉSIMO:** Que la responsabilidad trae aparejada la indemnización o reparación de los daños sufridos por la demandante.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que a partir oficio de fecha 24 de enero del 2023, remitido por el Instituto de Previsión Social, se da cuenta que don José Ricardo Rojas Ponce, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura, ha recibido pensión previsional en virtud de la Ley N°19.992, aporte único en base a la Ley N°20.874 y aguinaldos.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que en cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que ha causado el agravio.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que el pago de la indemnización de perjuicios a pagar, deberá ser reajustada desde la fecha en que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada hasta su pago efectivo según la variación de índice de precios al consumidor (IPC), debiendo agregarse a tal suma de dinero los intereses corrientes devengados para operaciones no reajustables de dinero a contar desde que la presente sentencia definitiva adquiriera su carácter de firme y ejecutoriada.

Por estas consideraciones, y vistos además, lo dispuesto en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; Convenio de Ginebra sobre tratamiento de los Prisioneros de Guerra; Convención Americana de Derechos Humanos; Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados; artículos 5, 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado; Leyes N° 19.123 y N° 19.980; y artículos 144, 170 y 254 y siguientes, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

I.- Que el Estado de Chile debe pagar a la demandante, a modo de indemnización de perjuicios por daño moral a don José Ricardo Rojas Ponce, la suma de \$80.000.000.- (ochenta millones de pesos), con los reajustes e intereses que se indican en la consideración vigésimo tercera.

II.- Que por resultar totalmente vencida la demandada, se le condena al pago de las costas.



C-6495-2022

Regístrese.

**ROL N° C-6495-2022**

**Pronunciada por don Álvaro Cayuqueo Pichicón, Juez Suplente.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diez de Enero de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XEZTXLVQGXC